

Las entidades piden exprimir la ley para hacer alquiler social

CLARA BLANCHAR, Barcelona

Las entidades sociales reclaman exprimir leyes o planes vigentes para modificar la gran norma urbanística de Barcelona (el PGM) y conseguir aumentar el parque de viviendas públicas de alquiler. Las organizaciones que más conocen los problemas de acceso a la vivienda, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinos o el Observatorio DESC, presentaron ayer una moción para el pleno del Ayuntamiento de Barcelona que busca impulsar fórmulas ya previstas para aumentar los pisos sociales.

La moción, que también apoyan la federación de entidades vecinales de la capital, la FAVB; y la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS), parte de cifras que vienen a demostrar que la ciudad está ante una "emergencia habitacional". En Barcelona hay 30.000 solicitantes que esperan un piso social, la ciudad ha vivido 12.000 desahucios en tres años (el 84% por alquiler), hay 2.000 personas viviendo en albergues y pensiones pagados por el Ayuntamiento, y los sin techo ya superan las mil

personas.

"Hay mecanismos para aumentar el inexistente parque público de alquileres públicos de la ciudad, de apenas el 1,5% sobre el total de viviendas", recordó Lucía Delgado, portavoz de la PAH. "La ciudadanía se adelanta a las instituciones una vez más y propone vías para conseguirlo", afirmó. Para sintetizar, se trataría de establecer reservas de suelo en nuevas promociones o en rehabilitaciones integrales, o de destinar parte del techo de proyectos de alojamientos turísticos a pi-



La PAH es una de las entidades que pide más pisos sociales. / C. BAUTISTA

sos de alquiler social. Otra fórmula sería ampliar las áreas de rehabilitación y conservación, y declarar áreas de tanteo y retracto, de forma que la administración pudiera ejercer la compra preferente de pisos o edificios y captar o multar los vacíos.

Para entrar en detalle, la primera fórmula sería destinar el 30% del techo de los edificios de nueva construcción o de las grandes rehabilitaciones a pisos públicos de gestión municipal. Así lo prevé la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007, un texto legislati-

vo que se avanzó a los problemas actuales (fijaba la necesidad de que un 15% del parque fueran pisos sociales), pero que no ha sido desplegado en su totalidad. "Si se hubieran cumplido las reservas de la Ley del Derecho a la Vivienda hoy tendríamos 5.000 pisos sociales", aseguró la portavoz de la PAH.

En el caso de la segunda fórmula, las entidades proponen que si se revisa el plan de hoteles de la alcaldesa Ada Colau (el PEUAT), se obligue a que los futuros establecimientos de uso turís-

tico "cedan el 40% de su techo a vivienda pública en otro edificio del mismo distrito".

La fórmula de declarar zonas como Áreas de Conservación está en la línea de lo que ya ha sucedido en el distrito de Ciutat Vella, concretamente en la calle de Robadors, de manera que las actuaciones llevan implícita la "declaración de utilidad pública". Así, se puede obligar a los propietarios a rehabilitar viviendas o forzar a los propietarios a poner los pisos vacíos al mercado (o a multarlos).

Edificios públicos

Por último, la moción de las entidades sugiere reconvertir a uso residencial edificios municipales que tienen otros destinos (como el antiguo edificio de los juzgados, en Via Laietana).

La moción presentada interpela a los grupos municipales del Ayuntamiento. A la rueda de prensa de presentación del texto acudieron representantes de todos los partidos salvo del PP. De entrada, aplaudieron la iniciativa. Y todos se comprometieron a estudiar el texto "con detalle". La idea de las entidades es llevarla al pleno del próximo viernes 23 de febrero en forma de Declaración Institucional.

El Proyecto Recooperem promueve el aprovechamiento del excedente de alimentos de los comedores infantiles

En esta escuela la comida no se tira

I. VALLESPÍN, Barcelona

Emilia, de 56 años, llega con su carro de la compra a la sede de Cáritas en Castellar del Vallès (Vallès Occidental), acompañada de su hija de 22 años, embarazada de ocho meses. Las dos sobreviven con los 300 euros mensuales que cobra Emilia de su prejubilación, con los exigüos ingresos que logra limpiando una casa una vez a la semana, con ayuda de la familia y con lo los alimentos que cada 15 días recoge en esta entidad. Zumo, leche, legumbres, pan... Y una bolsa con ocho fiambreras con comida congelada con garbanzos, arroz con verduras, brócoli... Son alimentos recogidos dos días antes del comedor de una escuela del municipio. "Es buena comida y te da tranquilidad porque sabes que viene de un colegio", cuenta Emilia.

Cáritas recoge cada semana hasta 240 fiambreras de seis escuelas del municipio que después reparte entre 160 familias. Castellar del Vallès fue en 2014 el laboratorio de pruebas del proyecto Recooperem, que impulsa el consejo comarcal, para luchar contra el malbaratamiento de alimentos. Cuatro años más tarde, la iniciativa se ha extendido a 24 escuelas de nueve municipios del Vallès Occidental, la mayoría de tamaño pequeño y mediano, excepto Terrassa, que se sumó en diciembre. Solo el pasado curso se logró recuperar 2.752 kilos de comida —lo que se tradujo en 6.000 fiambreras—, que se repartieron entre 272 familias seleccionadas por los servicios sociales.

El circuito empieza en las cocinas de las escuelas. "Cada día se cocina un poco más de lo que se necesita y lo que se no se sirve en el comedor es lo recuperamos. Antes esa comida se tiraba", apunta Lidia Segura, coordinadora peda-



Una voluntaria recoge excedentes de comida en el local de Cáritas de Castellar del Vallès. / CRISTÓBAL CASTRO

Pesar lo que se tira

La escuela 25 de setembre de Rubí ha implementado un proyecto complementario al Recooperem. Se trata del *Pesa i pensa*, que consiste en que los alumnos deben separar los restos de comida que ha quedado en el plato en varios contenedores y cada día se pesa los alimentos que se podrían ha-

ber comido. El día anterior que este diario visitó la escuela se tiraron 18,3 kilos de alimentos; el comedor tuvo ese día 388 comensales.

Los datos recogidos se introducen en una aplicación creada específicamente para el proyecto —que desarrollan una trenten-

na de escuelas— y se realizan unos gráficos que permiten a los estudiantes trabajar las matemáticas, pero también valores sociales y medioambientales. "Cuando iniciamos el proyecto y los alumnos veían los gráficos, exclamaban '¡Estamos tirando mucha comida!'. Ello les ha ayudado a ser más conscientes y a pedir menos comida", valora Núria Chipell, la directora de este centro.

gógica de la empresa Campos Estela, que gestiona varios de los comedores escolares que participan en la iniciativa. Al finalizar el servicio, las cocineras empaquetan la comida en fiambreras y las congelan. Posteriormente, las entidades las recogen en cajas térmicas y las llevan a sus congeladores, hasta que las reparten entre las familias. Y así se cierra el círculo.

Los beneficios del Recooperem son varios. "El proyecto nace para concienciar del malbaratamiento alimentario en las escuelas y para dar respuesta a las familias golpeadas por la crisis", resume Ignasi Giménez, alcalde de Castellar y presidente del consejo comarcal. "Es una idea fantástica poder aprovechar esta comida. Más lástima da ver a la gente buscando comida en la basura", terea Emilia, beneficiaria del proyecto. Pero también hay un importante componente pedagógico. "Ofrece a los niños un elemento para reflexionar. Muchos están acostumbrados a tenerlo todo y han descubierto que hay familias que no pueden ni calentarse la comida", Núria Chipell, directora de la escuela 25 de setembre de Rubí.

¿Por qué esa idea no está más extendida? Desde Campos Estela apuntan que cuando se trabaja con alimentos hay un riesgo, aunque sea mínimo, de una intoxicación y entidades o ayuntamientos, "no siempre están dispuestos a asumirlo". También los consistorios tienen que estar dispuestos, añaden, a asumir el coste de la compra de las fiambreras. Asimismo requiere de la implicación de las escuelas y de las empresas de los comedores. Y hay más. "Hace falta que la entidad social se quiera sumar, que haya suficientes voluntarios y que estos tengan tiempo", añade José Luis Izquierdo, miembro de Cáritas Castellar.